



Examinada su solicitud de informe, remitida a este Gabinete Jurídico, referente al Proyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las asociaciones de guardias civiles, solicitado de esta Agencia Española de Protección de Datos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 h) de la Ley Orgánica, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, y 5 b) del Estatuto de la Agencia, aprobado por Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, cúmpleme informarle lo siguiente:

Antes de entrar a analizar el texto sometido a informe es preciso señalar que, habida cuenta de la fundamentación legal del informe que inmediatamente va a evacuarse y su carácter preceptivo, a tenor de lo dispuesto en las normas que acaban de señalar, debería indicarse en la Exposición de Motivos de la norma que la misma ha sido sometida al previo informe de la Agencia Española de Protección de Datos.

EL Proyecto sometido a informe tiene por objeto el establecimiento de las bases reguladoras de las subvenciones a las asociaciones de la Guardia Civil, que se contienen en su Anexo, modificándose en su Disposición final primera la Orden reguladora de los ficheros del Ministerio del Interior, a fin de modificar el del Registro de Asociaciones Profesionales de Guardias Civiles.

De las normas contenidas en las citadas Bases reguladoras resulta especialmente relevante la contenida en la base Tercera.3 c) del Anexo, según la cual las asociaciones solicitantes de ayudas deberán aportar con su solicitud "relación certificada de todos los Guardias Civiles en situación de servicio activo o reserva pertenecientes a la asociación profesional que, a 1 de marzo del año en el que se convoquen las subvenciones, ostenten la plena condición de asociado de acuerdo tanto a la normativa vigente como a los propios Estatutos de la asociación Guardia Civil", incorporando los datos de empleo y escala de pertenencia e identificando a los asociados a través de su Tarjeta de Identificación Profesional y su número de asociado. Se añade que dicha relación certificada se formulará mediante declaración responsable que se registrará por el artículo 71 bis de la Ley 30/1992.

Al propio tiempo, como se dijo, se modifica el fichero correspondiente al Registro de Asociaciones de la Guardia Civil, a fin de incluir en el apartado relacionado con el colectivo afectado, además de los miembros de los órganos de gobierno de las asociaciones a los propios asociados, procediendo los datos de "las listas actualizadas a primero de marzo de cada año remitidas por las Asociaciones Profesionales de Guardias Civiles" y conteniendo el fichero los datos de la tarjeta de identidad profesional y escala de pertenencia y empleo.



Sentadas estas premisas, la comunicación al Ministerio del Interior por parte de las asociaciones de los datos de los asociados a las mismas para su posterior incorporación al Registro de Asociaciones de la Guardia Civil supone una cesión de datos por parte de las asociaciones y un posterior tratamiento de los mismos por parte del Ministerio, debiendo ambos contar con la adecuada legitimación para que los mismos puedan tener lugar, al amparo de lo dispuesto en los artículos 11 y 6, respectivamente, de la Ley Orgánica 15/1999. Además, dichas cesión y posterior tratamiento deberán resultar respetuosos con los principios establecidos en la Ley Orgánica, y particularmente los consagrados por el artículo 4 de la misma. En este sentido, los datos deberán ser los adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con las finalidades determinadas, explícitas y legítimas que justifican ese tratamiento.

A tal efecto, la memoria de impacto normativo del Proyecto recuerda, en lo que a la cesión de los datos de los asociados se refiere, que el fundamento de la cesión es similar al establecido para la obtención de subvenciones por parte de las asociaciones de jueces, con referencia al Acuerdo de 28 de abril de 2011, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a las Asociaciones Judiciales Profesionales, teniendo en cuenta la similitud de dichas asociaciones con las de la Guardia Civil.

Este mismo criterio es reiterado por el vigente Acuerdo de 14 de febrero de 2013, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, referido a la convocatoria de dichas subvenciones para el presente ejercicio, al establecer la base tercera.³ e) señala que “para la subvención por la efectiva implantación en la Carrera Judicial, (deberá aportarse) relación certificada de todos los Jueces y Magistrados pertenecientes a la Asociación, que se encuentren en servicio activo, conforme a lo previsto en el artículo 401.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, actualizada a fecha 30 de septiembre de 2013”.

No obstante, como puede desprenderse de la lectura del Acuerdo citado y del Proyecto sometido a informe, ambas normas contienen dos diferencias sustanciales: la primera de ellas es la de delimitar el supuesto en que procedería la comunicación de los datos, restringida en el caso del Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial a las subvenciones que guardan directa vinculación con la implantación de las correspondientes asociaciones, enumeradas en el apartado 3 de la base segunda del Acuerdo, mientras que en el supuesto sometido a informe, dicha relación certificada es de obligada aportación en todo caso.

La segunda de las diferencias se encuentra en el hecho de que la cesión prevista en el Acuerdo se efectuará mediante la remisión de una relación certificada de asociados, sin más previsiones, mientras que en el Proyecto sometido a informe se señala que la cesión “se formulará mediante declaración responsable”, con los efectos establecidos en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992.

El apartado 1 del citado precepto dispone que “a los efectos de esta Ley, se entenderá por declaración responsable el documento suscrito por un interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio”, añadiendo que “los requisitos a los que se refiere el párrafo anterior deberán estar recogidos de manera expresa, clara y precisa en la correspondiente declaración responsable.

Además, el apartado 3 del artículo 71 bis añade en su primer párrafo que “las declaraciones responsables y las comunicaciones previas producirán los efectos que se determinen en cada caso por la legislación correspondiente y permitirán, con carácter general, el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad, desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las Administraciones Públicas”.

De este modo, teniendo precisamente por objeto la declaración responsable la manifestación del cumplimiento de determinados requisitos para, en este caso, la obtención de las subvenciones, sirviendo asimismo, y sin perjuicio de los efectos derivados de su inexactitud para acreditar la concurrencia de dichos requisitos, que en este caso se referirían al número de guardias civiles pertenecientes a la asociación, parece resultar suficiente, a los efectos establecidos en la norma que dicha declaración se limitase a indicar el número de asociados, sin necesidad de aportar, junto con dicho número, la identificación de cada uno de ellos a través de los datos personales citados en la base tercera del Anexo. De este modo, esa relación exigida por la norma podría exceder del principio de proporcionalidad establecido por el artículo 4.1 de la Ley Orgánica 15/1999, sin poder encontrar, por su parte, acomodo en lo dispuesto en la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, toda vez que la misma, al regular el derecho de asociación de los miembros de la Guardia Civil se limita a indicar que las asociaciones podrán financiarse a través de subvenciones, como las reguladas en el Proyecto, pero sin que esta previsión sea suficiente a los efectos de amparar la comunicación individualizada de los datos identificativos de la totalidad de los afiliados y sin que dicha cesión tampoco pueda encontrar cobertura en lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo.

De este modo, y sin perjuicio de la potestad de comprobación de la certeza de la declaración responsable que se refiriese al número de asociados de las correspondientes asociaciones de la Guardia Civil, puede considerarse que la comunicación de la relación certificada de los datos de todos y cada uno de los asociados resulta excesiva para la finalidad que la justifica y, en consecuencia, no encuentra acomodo en la Ley Orgánica 15/1999.



Incluso en caso de que la cesión anteriormente analizada pudiera llegar a considerarse ajustada al principio de proporcionalidad, sin perjuicio de la conclusión negativa alcanzada, el tratamiento de dichos datos consistente en su inclusión en el fichero del Registro de Asociaciones de la Guardia Civil tampoco encontraría acomodo en el mencionado principio, como inmediatamente se señalará.

Respecto del Registro, los apartados 1 y 2 del artículo 48 de la Ley Orgánica 11/2007 se limitan a indicar que “las asociaciones profesionales de Guardias Civiles quedarán válidamente constituidas desde que se inscriban en el Registro de Asociaciones Profesionales habilitado al efecto en el Ministerio del Interior” y que “la inscripción se practicará a solicitud de cualquiera de los promotores, a la que se acompañará el texto de los estatutos y el acta fundacional, indicando quiénes de éstos actúan como representantes”.

Por su parte, la Orden INT/3939/2007, de 28 de diciembre, se limita a habilitar el mencionado Registro, señalando en el apartado 1 de su artículo 4 que el mismo se somete a lo establecido en la ya citada Ley Orgánica 11/2007 y su normativa reglamentaria de desarrollo así como, supletoriamente, por el régimen general establecido en la Ley Orgánica 1/2002 y en el Real Decreto 1497/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro nacional de Asociaciones y de sus relaciones con los restantes registros de asociaciones.

Pues bien, a falta de una previsión específica relativa a los actos inscribibles en el Registro de asociaciones de la Guardia Civil, el artículo 28 enumera en su apartado 1 los actos inscribibles y los documentos depositados en el mismo en su apartado 2, sin que en ningún supuesto quepa considerar incluidos en el registro los datos relacionados con cada uno de los miembros concretos pertenecientes a la asociación. En el mismo sentido se pronuncia el Real Decreto 1497/2003, al que se remite la Orden INT/3939/2007.

De este modo, siendo la finalidad del Registro de Asociaciones Profesionales de la Guardia Civil la de dar fe de la existencia de las citadas asociaciones, cuya inscripción en el registro es constitutiva, así como de las vicisitudes de las mismas en los términos previstos en la Ley Orgánica 11/2007 y, supletoriamente en la Ley Orgánica 1/2002, cuyo artículo 28.1 debe ser especialmente tenido en cuenta a estos efectos, la inclusión en el Registro de los datos relacionados con cada uno de los miembros de la asociación, al margen de quienes integrasen sus órganos de gobierno como consecuencia de la mera cesión de este dato para la obtención de subvenciones públicas sería igualmente contraria al principio de proporcionalidad establecido en el artículo 4.1 de la Ley Orgánica 15/1999, al no ser necesaria la inscripción de tales datos para el cumplimiento de la finalidad del Registro, deviniendo ese tratamiento en el citado fichero claramente excesivo en relación con dicha finalidad.



A la vista de todo ello, esta Agencia considera que tanto la cesión por las asociaciones a través de la declaración responsable a la que se refiere el punto 3 c) de la base tercera del Anexo de la disposición sometida a informe de los datos individualizados de todos los integrantes de la misma como su inclusión posterior en el fichero del registro de asociaciones, prevista en la disposición final única del Proyecto, resultan contrarias al principio de proporcionalidad consagrado por el artículo 4.1 de la Ley Orgánica 15/1999, no pudiendo emitir informe favorable en relación con el citado Proyecto.